

Prejuicios inciviles

Diario Vasco, 17. 11. 2003

Quién a estas alturas no ha dicho u oído aquello de que «todos los políticos son iguales», se sobreentiende: gente de poco fiar o tipos que van a lo suyo? Sentado lo cual, ¿para qué molestarse en comprender sus diferencias ideológicas, comparar sus programas o vigilar sus conductas públicas, con el trabajo que ello exige? ¿No habría que añadir el riesgo de tener que pronunciarse sobre la justicia o injusticia de sus reclamaciones y quedar así expuesto a las réplicas del contrario? Resulta más confortable reducir a los políticos al común denominador de aprovechados, que ahí nos entendemos todos.

Ellos y nosotros

Nadie ignora, ni que estuviéramos ciegos, cuánto indeseable alberga al parecer una súbita vocación de servir al pueblo. Pero no es menos cierto que a menudo su presunta inepticia o su real malicia nos sirvan para certificar, por contraste, nuestra acrisolada competencia y un altruismo sin tacha. Sólo cuando nos aprietan reconocemos que, sometidos a sus tentaciones y presiones cotidianas, a lo mejor nosotros seríamos tan estúpidos o corrompibles como ellos. Y casi nunca reparamos en que, mucho peor que la corrupción de este o aquel político, resulta la corrupción de la política democrática misma; por ejemplo, mediante la financiación privada de los partidos o las demandas etnicistas para la ruptura política. Estas son prácticas que pervierten a la comunidad entera.

Claro que, a la inversa y en tono entre gruñón y comprensivo, se declara asimismo que «tenemos los políticos que nos merecemos». Y se presupone: mediocres. Es un modo oblicuo de confesar por fin que somos aproximadamente de la misma pasta y que no vale la hipocresía de culparles en exclusiva de unos pecados que los demás

quizá también cometeríamos en su lugar.

Sí, pero al mismo tiempo esa en apariencia humilde concesión viene a sugerir que nadie exija nada de los hombres públicos ni de los ciudadanos de a pie, porque ni unos ni otros vamos a cambiar; así que no nos quejemos y a conformarse con lo que hay. Bonita escapatoria. En un régimen democrático siempre debemos hacernos merecedores de más de lo que tenemos, y eso significa que hemos de buscar políticos que sean mejores que nosotros. No los elegimos como representantes para que reproduzcan en el foro el desinterés y mediocridad del conjunto, sino para que hagan suyas nuestras más dignas aspiraciones.

Vamos a politizar las cosas

Tanto prejuicio acumulado contra la política se muestra en el runrún habitual de que una determinada situación o medida es nefasta, por lo menos sospechosa, porque «se ha politizado» y «no hay que politizar» las cosas o los problemas.

Pues no es verdad: hay que politizar todo lo que nos compete y cuanto más mejor. Es decir, hemos de procurar que lo que afecta a nuestra libertad e igualdad; que cuanto puede contribuir a nuestro bienestar colectivo pase por la conciencia de los ciudadanos, se debata en la polis y se decida públicamente acerca de su conveniencia. Al fin y al cabo el hombre es el ser que tiene el privilegio y la obligación de distanciarse de la bruta necesidad natural, es decir, de dominar esa naturalidad mediante la política y sus propias leyes. Contra la creencia básica del nacionalismo étnico, vale más el decidir que el ser, somos tanto más libres cuanto menos naturales (o prehistóricos) y más politizados. Y, como no ocurra así, no es que el asunto en cuestión esté despolitizado, sino que algún interés bastardo lo ha excluido del juicio y decisión de todos para ser politizado por y en beneficio de algunos.

¿Que el tópico de marras sólo quiere denunciar las intervenciones «partidarias» o «sectarias», las que subordinan el interés general al particular de un grupo o de un líder? Pues entonces dígame, para no confundir ni confundirnos, que ese problema está mal politizado y hay que esmerarse en politizarlo bien.

Un angelismo de bárbaros

Una de las mayores y en esta tierra la más peligrosa falsedad en circulación, que abochorna, sigue repitiendo que hay que «condenar la violencia, venga de donde venga». Semejante consigna simula ser portadora de una exquisita sensibilidad moral en quien la emite, pero prueba más bien que o no sabe lo que dice o -si lo sabe- que busca nuestra perdición colectiva. No mantengo sólo que esa sentencia nace de ignorar el abecé de la política, pues sería más exacto decir que ignora incluso la primera letra de la política, su punto de partida, su condición misma de posibilidad. O, si se prefiere, que confunde la sociedad de los hombres con la celestial comunión de los santos. Esto, que no deberían permitirse ni las carmelitas descalzas en sus ratos de recreo, lo sueltan aún para quedar bien la mayor parte de nuestros enseñantes (y así van sus alumnos), los más aguerridos políticos y bastantes experimentados chicos de la prensa. El actor Eduardo Noriega ha sido el último famoso en pronunciarlo a propósito de este País Vasco: «no entiendo la violencia ni en nombre de la independencia ni de la protección del Estado. Todo me parece la misma mierda» (El País, 7 de noviembre). Otra gran barbaridad de la escuela de Medem.

Pues los hombres inventamos la política para obtener la seguridad que la hostil naturaleza nos niega, para librarnos del miedo recíproco; en fin, para garantizar en lo posible que no habría guerra entre nosotros y sentar las bases de la sociedad civil. Luego vendrá todo lo demás que la política debe traer y cuyo compendio es la justicia. Y si aún no hemos renunciado al sentido común, comprenderemos que, a fin de que nadie recurra impunemente a la fuerza física, alguien tendrá que disponer del derecho en exclusiva a ejercerla; ese alguien será el poder público.

De forma que, si aborreciéramos por igual toda violencia, entonces nada nos pondría a salvo de una: la del más fuerte sobre los más débiles. Si equiparamos en perversión la violencia privada del malhechor y la pública del policía, olvidamos que ésta existe para prevenir o repeler aquélla y, por si fuera poco, dejamos de discernir entre las causas justas o injustas que de ella pudieran servirse. Todas darían lo mismo. Si justificamos todavía este presunto pacifismo (en realidad, un ignorante y temible angelismo) con aquello de que «la violencia engendra violencia», venimos a añadir otra biempensante tontería. Pues lo que desata una cadena segura e imparable de

venganzas es la violencia privada, pero la violencia pública pretende poner fin a esa infinita cadena. Ahí está el reciente descenso de la kale borroka o de la actividad mortífera de ETA.

La violencia pública se justifica cuando se ajusta a derecho, naturalmente. Supuesto que en toda sociedad debe haber una fuerza ejercida en régimen de monopolio; supuesto que el recurso a esa fuerza física puede ser del todo legítimo..., lo que importa es fijar el marco, los requisitos, los límites para que la violencia del Estado sea lo más acotada y justa posible. Tal es el núcleo del Estado democrático de Derecho, a saber, el imperio de la ley de todos sobre todos sin excepción. Y así se entiende que pueda ser más disculpable la violencia indebida de un ciudadano ordinario que la del policía que se propasa, precisamente porque la de este último está destinada a protegernos de cualquier otra.